



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS TITULADO “SERVICIO DE ASEGURAMIENTO, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES PÓLIZAS, PARA DIVERSAS COBERTURAS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (2 LOTES)”.

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación las necesidades que se pretenden cubrir, mediante el presente contrato para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Los bienes públicos constituyen un recurso esencial para la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de las funciones y competencias que corresponden a toda Administración Pública. Por este motivo, la protección y defensa de su patrimonio, por parte de las Administraciones Públicas, constituye una auténtica obligación legal recogida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Para la prestación de los servicios públicos que le corresponden, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, en adelante CFJPS, dispone de una serie de bienes patrimoniales, tanto de carácter inmueble como mueble, cuya protección y defensa, además de ser esencial para el desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, constituye una obligación legal recogida en el art. 28 de la Ley 33, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la cual, en el caso de concreto de la Comunidad de Madrid, queda recogida en el deber de gestión, conservación y colaboración establecido en el art. 18 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, una adecuada protección, conservación y administración de estos bienes patrimoniales requiere garantizar el aseguramiento de los posibles daños materiales que se puedan producir como consecuencia de incendios, explosiones o caídas de rayos; los producidos por fenómenos atmosféricos, tales como viento, lluvia, pedrisco, etc.; actos de vandalismo; daños por agua o electricidad, rotura de cristales, robo y expoliación, entre otros. Esta posibilidad de aseguramiento se encuentra contemplada en la citada Ley 3/2001, de 21 de junio, en concreto en su art. 16.1, donde se establece que *“los bienes muebles e inmuebles se podrán asegurar mediante la póliza correspondiente cuando, previa valoración y estudio económico, se considere conveniente y así lo acuerde la Consejería, Organismo Autónomo, Entidad de Derecho público o Ente Público interesados”*.

De la misma manera, en aras de garantizar una gestión adecuada del servicio público, parece conveniente asegurar las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil/patrimonial, establecida en el Art. 106.2 de la Constitución Española, desarrollado en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, que se puedan derivar para la CFJPS de forma directa, mancomunada, subsidiaria o solidaria por los daños personales, materiales y perjuicios consecutivos ocasionados involuntariamente a terceros, debido tanto por la titularidad y explotación de los bienes que constituyen su patrimonio.

Al hilo de lo anterior, dado que los empleados públicos al servicio de la Comunidad de Madrid estarían excluidos del ámbito de la póliza referida, al no ser considerados terceros perjudicados respecto del empresario, resulta igualmente conveniente extender la cobertura mediante la suscripción de una póliza de seguros que cubra también la responsabilidad que se le pueda exigir a la Comunidad de Madrid, a través de la CFJPS,



en su calidad de empleador como consecuencia de los accidentes de trabajo que puedan afectar al personal a su servicio.

En otro orden de cosas, para asegurar, por un lado, la continuidad de las prestaciones que le corresponden a la CFJPS en unas condiciones de seguridad adecuadas tanto para los empleados públicos como para cualquiera de sus usuarios y, por otro, el correcto funcionamiento y conservación de los diferentes elementos y sistemas que conforman los inmuebles; su adecuación a la normativa que le es de aplicación, la adaptación de estos a otros usos diferentes a los originalmente previstos o una mejor eficiencia energética, en otras cosas, se requiere la intervención de profesionales con una formación habilitante en los campos de la arquitectura y de la ingeniería durante las tres etapas básicas en las que se pueden dividir este tipo de trabajos: la fase inicial, donde se llevan a cabo los análisis y estudios previos; la fase de ejecución, propiamente dicha, en donde se interviene en su dirección, y en la fase final, en la que se comprueban los resultados mediante el posterior seguimiento y control sobre lo teóricamente efectuado.

A este respecto, dentro de la estructura organizativa de la CFJPS, dependiente de la Subdirección General de Análisis y Organización, se encuadra el Área de Supervisión de Proyectos, Obras e Instalaciones, a la cual están adscritos actualmente un total de nueve empleados públicos que realizan sus funciones, como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos, dependiendo de las titulaciones que acreditan. Esas titulaciones les habilitan para llevar a cabo actividades relacionadas directamente con su profesión, entre las que cabe destacar las siguientes: el diseño y realización de proyectos técnicos; direcciones de obra; la elaboración de informes derivados de tasaciones, peritaciones, inspecciones técnicas de edificios(ITE), certificaciones energéticas, etc.; la realización de estudios de patología y rehabilitación; deslindes, mediciones y replanteos; cálculo de estructuras; trabajos relacionados con el medio ambiente; coordinaciones en materia de seguridad y salud: la supervisión de proyectos, seguimiento y supervisión de obras e instalaciones en inmuebles; la realización de informes urbanísticos; la aplicación de ordenanzas; y la tramitación de licencias.

Dada la amplitud del ámbito de actuación, la propia naturaleza peligrosa de ciertos trabajos o la complejidad de determinadas materias sobre las cuales deben responder mediante su conocimiento y práctica, este conjunto de profesionales no está exento de cometer errores que, bien por acción u omisión, sin que concurra dolo, culpa o negligencias grave, pueden causar daños y perjuicios a terceros, de los que se derivarán reclamaciones judiciales de tipo administrativo, civil y penal.

En efecto, la presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios contra la CFJPS como consecuencia de la actividad profesional de estos técnicos en el ámbito de sus funciones, supondrá el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, de conformidad con las previsiones contenidas en la normativa de aplicación, que en aquellos casos en que se reúnan de forma conjunta los requisitos que se exigen para su reconocimiento dará lugar a la reparación del daño mediante la indemnización económica que corresponda.

En tal sentido, considerando la probabilidad de que los técnicos del Área de Supervisión de Proyectos, Obras e Instalaciones puedan quedar incurso en un procedimiento de este tipo, y teniendo en cuenta la posibilidad que ofrece la normativa regulatoria en materia contractual de que la Administración suscriba contratos de seguros, resulta a todas luces conveniente la suscripción de una póliza de seguro que cubra los riesgos que se puedan derivar de la actividad profesional que desarrollan en la Consejería, a la espera de lo que la Comunidad de Madrid realice en este sentido, de acuerdo a lo previsto en el art. 86 del Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 21 de abril de 2021, de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, sobre condiciones de



trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid (2021-2024).

En relación a este extremo, en respuesta a un escrito dirigido desde la SGT de la CFJPS a la Subdirección General de Relaciones laborales de la D.G. de la Función Pública, en el que se solicitaba aclaración sobre las coberturas que se pretendían conseguir con el contrato que se formalizase para materializar el compromiso de la Comunidad de Madrid adquirido en el Acuerdo, se recomendó a esta SGT, al igual que se estaba realizando con otras Consejerías y Organismos, que se renovaran las pólizas que se tuvieran suscritas, y con las coberturas que se entendieran necesarias, dado el estado de tramitación en el que actualmente se encuentra, de tal manera que al vencimiento de éstas se produjera la incorporación al ámbito de protección de dicho contrato.

En términos económicos, el hecho de contar con un aseguramiento en los ámbitos anteriormente indicados garantizará la estabilidad en la ejecución presupuestaria, ante la imposibilidad de predecir qué sucesos podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades; las obligaciones que habría que atender, en su caso, en forma de indemnizaciones, gastos y fianzas; y las cuantías económicas de las mismas. En este contexto, no resulta adecuado establecer una dotación presupuestaria anual para afrontar estas contingencias, sino que parece más conveniente garantizar la cobertura de las responsabilidades mediante un contrato de seguro que contemple los posibles riesgos que puedan afectar a los intereses de la CFJPS.

A la vista de lo anteriormente expuesto, por considerarlo necesario e idóneo en orden a proteger los intereses patrimoniales y económicos de esta Consejería, en los términos exigidos por el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se plantea la contratación de las siguientes pólizas de seguros con los alcances que se determinan para cada una de ellas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

- Póliza multirriesgo que ofrezca cobertura sobre los riesgos de daños materiales en los bienes adscritos a la Consejería de familia, Juventud y Política Social; de responsabilidad civil por uso y explotación de los mismos; y de responsabilidad civil patronal (lote 1).
- Póliza de seguro que cubra los riesgos que se deriven de la responsabilidad civil profesional del personal técnico destinado en la citada Consejería que realiza labores de supervisión de proyectos, obras e instalaciones (lote 2).

Madrid, a fecha de firma.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Fdo. Lubima Jivkova Kosseva

